

Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga - ICP
Estrategia de “colombianización” y divulgación - Programa de Políticas Públicas de Usaid

“Esta publicación ha sido posible gracias al generoso respaldo del pueblo americano a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid). Los contenidos son responsabilidad del ICP y no necesariamente reflejan la opinión de Usaid o del gobierno de los Estados Unidos”

Relatoría

Mesa de expertos “Microcréditos agropecuarios en Colombia: una oportunidad para el desarrollo rural”

Jueves 7 marzo 2013

Relatoría

En aras de contribuir a una mayor comprensión sobre el rol de los microcréditos agropecuarios en el desarrollo rural, resulta pertinente conocer los casos más exitosos de implementación de microcréditos agropecuarios en América Latina, como lo son **Guatemala, Bolivia y Perú**.

En el Auditorio del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y organizado por el ICP, el diario Portafolio y el Programa de Políticas Públicas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional-USAID, se realizó la mesa de expertos sobre microfinanzas agropecuarias. A ella asistieron los expertos internacionales **Elizabeth Nava, gerente general de Banco FIE Bolivia**; el banco con mayor cobertura en Bolivia y que en el año 2012 recibió la mayor calificación del ranking anual Microfinanzas Américas entre las 100 mejores entidades por parte del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) y el Microfinance Information Exchange Inc. **Adolfo Fernando Peña Pérez, presidente de Banrural Guatemala**; el banco más importante de Guatemala y uno de los casos más exitosos de microfinanzas agropecuarias en el mundo. Con más de cinco millones de clientes en todo el país (la población total de Guatemala es de alrededor de 14 millones), es pionero en la oferta de servicios de banca universal, dirigido al micro, pequeño, y mediano empresario, agricultor y artesano. **Elizabeth Ventura Egoávil – Presidente de Financiera Confianza Perú**, entidad líder en la oferta de servicios financieros a población que realiza actividades agrícolas y pecuarias de pequeña escala en zonas rurales. La entidad ha desarrollado una tecnología crediticia rural que permite tener una adecuada evaluación del sector. **Anita Champion - Presidente Ejecutiva de la consultora internacional AZMJ en la ciudad de Washington, D.C.** AZMJ es una empresa de consultoría de gran reputación internacional en acceso a servicios financieros rurales. Ha asesorado y evaluado a varias instituciones financieras, incluyendo: gobierno (Jordania, Perú), investigación de mercado (Egipto, Jordania, Filipinas), ahorros rurales y diseño de productos de préstamos (Jordania, Madagascar, Mali, México, Perú), monitoreo y manejo de desempeño financiero y social (múltiples Instituciones Monetarias Financieras-MFI's globalmente), administración de riesgos y garantías DCA (México), control y auditoría interna (Indonesia, Mali, México).

Así mismo asistieron **Juliana Álvarez**, directora del programa Banca de las Oportunidades; **María Clara Hoyos**, presidente ejecutiva de Asomicrofinanzas; **Luis Carlos Morales**, vicepresidente de Desarrollo Rural en FINAGRO, Margarita Henao, directora de Inclusión Financiera y Sistemas de Pago de la Asobancaria; **José Leibovich** y **Beatriz Marulanda**, expertos en microfinanzas agropecuarias; además de expertos del Programa de Políticas Públicas de USAID.

Los participantes estuvieron de acuerdo en la **necesidad de desarrollar instrumentos financieros y crediticios que satisfagan las necesidades propias de los microempresarios rurales en Colombia**, y que igualmente resulten sostenibles y rentables para la banca. En este sentido, las instituciones financieras presentes en la mesa argumentan que uno de los

principales obstáculos para incursionar en el financiamiento rural, además de los altos costos provenientes de las dificultades de acceso a las poblaciones rurales y los riesgos relacionados con el conflicto armado, es la existencia de tasas de interés subsidiadas por el Estado que desincentivan a la banca a desarrollar productos financieros para los microagricultores. Sin embargo, vale la pena mencionar que las posibilidades del Estado para otorgar créditos al sector rural son muy limitadas, especialmente a los micro, pequeños, y medianos empresarios, agricultores y artesanos, y por ello resulta muy deseable que la banca privada y otras instituciones no reguladas (ONG's, cooperativas) se acerquen al sector rural.

En el caso colombiano, la **tasa de interés** para el sector rural tiende a ser alta -en contraste con el crédito urbano- en razón de los riesgos percibidos por la banca. Al respecto, los expertos internacionales coincidieron en que la mejor forma de regulación es a través de la libre competencia entre diferentes instituciones financieras que incursionan en el mercado rural y que compiten por captar clientes a través de tasas de interés más favorables. Este es el caso del Banco FIE en Bolivia, que al incursionar en el sector rural con tasas de interés iguales a las del sector urbano, generó competencia y obligó a las demás instituciones financieras a disminuir el costo de sus productos.

Con relación al **riesgo de no pago**, los expertos coinciden en que éste puede disminuirse a través del financiamiento de las cadenas de valor agropecuario -en contraste con créditos individuales- y mediante una oferta integral de financiamiento al sector rural que contemple servicios de crédito, ahorro, remesas etc. En los casos internacionales que se presentaron, el riesgo de no pago también se disminuye al considerar en la evaluación y otorgamiento del crédito el flujo de caja de la unidad familiar, teniendo en cuenta que en el caso de los microagricultores resulta difícil separar los flujos de la actividad económica y de la unidad familiar que por lo general suceden en un mismo lugar.

En cuanto a los **factores de éxito y sostenibilidad** de los tres casos de financiamiento agropecuario internacionales que se presentaron, se destaca el factor confianza entre las instituciones financieras y la comunidad rural, como resultado del esfuerzo realizado por las instituciones para entender las necesidades de las comunidades rurales y acoplar su oferta de productos a las mismas. Esta relación de confianza es igualmente un factor que favorece la sostenibilidad y rentabilidad de los microcréditos, en la medida en que la mayoría de los clientes cumplen con sus obligaciones porque les interesa conservar su capacidad de endeudamiento. Por ejemplo, en el caso de Banrural Guatemala, la tasa de morosidad es menor al 1% de una cartera de aproximadamente 4.000 millones de dólares.

En el caso de Colombia, el programa Banca de Oportunidad tiene como objetivo acercar a la oferta y a la demanda, para minimizar los niveles de desconfianza entre las partes, el cual se presenta como uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de productos financieros destinados al sector rural. Sin embargo reconocen que hay una deuda con el sector rural importante y es hora de atenderla. Este tipo de espacios sirven para mostrar que si se pueden lograr experiencias exitosas y nos ayudan a aprender de ellas. La misión social de las entidades financieras está desenfocada y en lugar de ver el potencial de inversión en el campo se quedan con los riesgos. El reto es que ambos confíen el uno en el otro.

Dentro de las dificultades que se encontraban en Bolivia estaban la pobreza del sector rural y la inseguridad. Había déficit de infraestructura en salud, educación y malla vial. Y se encontraron con altos costos de contratación de personal capacitado que se trasladara a esas zonas. Para reducir esos costos y riesgos contrataron personal local y se empezó financiando pequeñas cadenas. Pero el factor más positivo de esta experiencia ha sido el hecho de que existió voluntad política de parte del banco para asumir los riesgos.

Como recomendaciones también se dejó explícito que la banca debería ser administrada por personas que estén formadas en el campo financiero y no político. También se propone pensar en la mujer como cliente potencial y sujeto de nuevos servicios, teniendo en cuenta su rol de víctima del conflicto y el papel económico que ocupa en su núcleo familiar. Por otro lado se propone pensar al agricultor como empresario, y en esa medida diseñar un paquete de servicios que no solo contemplen créditos sino que también se ofrezcan microseguros, estudios de mercado, estudios sobre el producto, cuentas de ahorro, entre otros.

La asistencia técnica y el estudio de mercados pueden ser herramientas fundamentales para el desarrollo rural en Colombia. Ofrecer servicios que partan del entendimiento de la diversidad de la tierra, de los productores, de los cultivos, de los climas y las regiones es trascendental.

Finalmente, en un país donde la pobreza es principalmente rural, el desarrollo de instrumentos como **el microcrédito agropecuario se convierte en un camino hacia la superación de la pobreza, la generación de ingresos y la reducción de la brecha de desigualdad social** entre el mundo rural y el urbano. De esta mesa de expertos podemos rescatar la importancia de la confianza, la voluntad política para ir al sector rural, y la necesidad de articular el mercado agropecuario al resto.

Este tema adquiere gran relevancia en el contexto de los diálogos para la terminación del conflicto armado, la implementación de la política de restitución de tierras por parte del gobierno nacional y un posible escenario de postconflicto. Para futuros debates o foros sobre estos temas quedaron propuestas las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos darles crédito a personas que no tienen garantía sobre la tierra? ¿Cómo diseñamos tasas acordes a los ciclos de los productos agropecuarios que faciliten la capacidad de pago del empresario? ¿Cómo podemos reducir los costos para llegar a las zonas apartadas del país? ¿Cómo podemos llegar y entrar en las zonas rurales? ¿Cómo podemos lograr que los empresarios confíen en la banca?